



CONVOCACIÓN

**FRENTE A ESTE SISTEMA QUE SE VISTE DE INCLUSIÓN,
CONOCIMIENTO CRÍTICO Y ORGANIZACIÓN**

CONVOCACION.CL

Artículo Convocación

**A RECUPERAR LA
VOCACIÓN PROFESIONAL**

Artículo Habitabilidad

**RECONSTRUCCIÓN
POST INCENDIOS**

Artículo Salud

**EL PRECIO DEL
CÁNCER EN CHILE**

Artículo Ciencias

**EL PROBLEMA DE LA
ENERGÍA EN CHILE**

Artículo Concepción

**MORTALIDAD INFANTIL
EN EL BIOBÍO**



CONTENIDOS



Artículo Convocación

A RECUPERAR LA VOCACIÓN PROFESIONAL

Pág. 4 - 6

Artículo Habitabilidad

RECONSTRUCCIÓN POST INCENDIOS: LA PRECARIEDAD HABITACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO

Pág. 7 - 10

Artículo Salud

EL PRECIO DEL CÁNCER EN CHILE

Pág. 10 - 14



Artículo Ciencias

EL PROBLEMA DE LA ENERGÍA EN CHILE: UN POTENCIAL DESAPROVECHADO

Pág. 15 - 18

Artículo Convocación Concepción

MORTALIDAD INFANTIL EN EL BIOBÍO: UN LLAMADO A LA ACCIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Pág. 19 - 22



¿Qué es Convocación?

Somos una organización de profesionales de diferentes disciplinas, que tiene como horizonte la transformación de la sociedad en una justa e igualitaria.

Consideramos indispensable poner nuestros conocimientos y capacidades al servicio del movimiento popular, para fortalecer un proyecto de sociedad justa y con condiciones de vida digna para la mayoría.

¿Dónde funcionamos?



Santiago y Concepción

@convocacion



convocacion.cl



equipo.convocacion@gmail.com



Relatos Convocacion



ALZANDO LA VOZ PROFESIONAL

A pesar de que vivimos en un momento histórico en el que Chile cuenta con más profesionales que nunca, los problemas sociales se han agudizado. Esta paradoja pone de manifiesto la mercantilización del trabajo profesional, donde el beneficio económico se ha priorizado por sobre las necesidades sociales.

La salud pública, reflejada en el alarmante aumento de la mortalidad por cáncer, expone las desigualdades que perpetúan la precariedad. La ineficacia de las políticas públicas y la creciente privatización de la atención médica han dejado a los sectores populares en una condición desigual. Por otro lado, a pesar de los avances en la disminución de la mortalidad infantil en general, las disparidades en regiones como Biobío requieren atención urgente, evidenciando que el bienestar materno-infantil sigue siendo un desafío pendiente.

Las recientes catástrofes, como los incendios en la Región de Valparaíso, revelan la injusticia detrás de las políticas habitacionales y la gestión territorial, donde la relación entre Estado e intereses privados han dejado a miles de familias expuestas a condiciones inaceptables. Las promesas de cambio han sido reemplazadas por respuestas burocráticas que perpetúan las condiciones precarias del hábitat y el riesgo a futuros desastres.

En el ámbito energético, la dependencia de combustibles fósiles plantea un reto que no solo compromete la sostenibilidad, sino que también pone en riesgo la seguridad energética del país. A pesar de contar con un potencial renovable significativo, el país sigue siendo dominado por una matriz energética que beneficia a grandes

corporaciones mientras las familias populares deben pagar costos cada vez más elevados por las alzas en electricidad.

Ante este panorama desolador, desde ConVocación hacemos un llamado a todos los profesionales a recuperar su vocación. No podemos permitir que nuestras capacidades y conocimientos queden relegados a un sistema que los mercantiliza. Es imperativo que utilicemos nuestra formación como herramienta de lucha, trabajando colectivamente para abordar las injusticias y desigualdades que enfrenta nuestra sociedad, levantando organización que una a los profesionales interesados al servicio de una alternativa para el pueblo.

Este séptimo número de nuestra revista busca ser un espacio de análisis para la acción. Proponemos discutir y desafiar las ideas que han llevado a nuestra sociedad a una crisis, promoviendo un enfoque que priorice el desarrollo de todas las personas. La solución a estos problemas radica en nuestra capacidad para organizarnos y construir un poder que dispute la hegemonía del sistema de dominación.

No podemos quedarnos de brazos cruzados. A través de esta revista, aspiramos a inspirar la transformación y a fortalecer nuestra red de profesionales comprometidos. Es hora de transformar el conocimiento en acción y de comprometernos con la lucha por una vida digna para todos.

Profesionales Convocación.



Exposición de Convocación en el día de la Atención Primaria de Salud - CONFUSAM (foro).

A RECUPERAR LA VOCACIÓN PROFESIONAL

A pesar de que Chile cuenta con más profesionales que nunca, muchos problemas sociales persisten debido a la mercantilización del trabajo profesional. La educación y el ejercicio profesional están orientados hacia el lucro, priorizando el beneficio privado sobre las necesidades sociales. Esto ha limitado el desarrollo profesional y ha aumentado la desigualdad.



En la actualidad nuestra sociedad cuenta con más profesionales y técnicos que en cualquier otro momento de la historia. Según datos de CASEN, para el 2022 la cifra ascendía a aproximadamente cuatro millones de personas con estudios de educación superior completa en Chile, de los cuales más de un millón y medio somos profesionales. Y si bien contamos con una mayor cantidad de trabajadores calificados para enfrentar diversos desafíos, muchos de los problemas sociales en los que deberíamos intervenir con nuestro trabajo aún no encuentran solución. Ejemplos de estos incluyen el acceso a la vivienda, la salud y los servicios básicos, así como el desarrollo de la industria y la ciencia, entre otros. Estas y otras problemáticas se han agudizado. Es decir, **en el momento en que contamos con más herramientas técnicas y conocimientos para construir una mejor sociedad, algo limita su realización.**

En nuestro análisis, la causa de esta limitación se encuentra en la mercantilización del ejercicio profesional promovida por el sistema. El trabajo técnico se dirige principalmente a quienes tienen el poder adquisitivo para pagarlo y mantener el orden social actual. En otras palabras, se instalan lógicas e incentivos donde la acumulación de ganancias predomina sobre la respuesta a las necesidades sociales, lo que tiene consecuencias directas tanto en las condiciones de vida del pueblo como en las posibilidades de desarrollo profesional.

La primera manifestación de cómo la mercantilización afecta el desarrollo profesional se observa en la formación de pregrado. La lógica mercantil de la educación superior ha provocado la expansión de universidades, institutos y centros de formación motivados por el negocio educativo, lo que explica la masificación del sector. Sin embargo, esto ha ocurrido a costa de la precarización del conocimiento y la falta de planificación de la matrícula y los contenidos según las necesidades sociales. Consi-



Profesionales Convocación junto a las Brigadas Territoriales en trabajos voluntarios en la toma Nuevo Amanecer en Cerrillos, 2024

derar la educación como una mercancía por la que se paga desvirtúa el sentido de la formación y el ejercicio profesional para la sociedad, y los profesionales se educan para servir a quienes pueden pagar.

Así, comenzamos este camino con una mala formación profesional, con conocimientos y herramientas técnicas escasas y sesgadas. Ante esto, el modelo promueve el discurso de la educación continua, incentivando la realización de estudios de postgrado o diplomados como una forma de “desarrollo” y diferenciación en el mercado laboral. Sin embargo, al analizar los programas y cursos de muchos de estos postítulos, observamos que reproducen contenidos que deberían impartirse en el pregrado o, en el mejor de los casos, complementan con nuevos conocimientos que difícilmente pueden aplicarse en la práctica en lugares de trabajo que no responden al mercado. Bajo una fuerte alianza entre los factores económicos e ideológicos de dominación, el modelo impulsa sus nichos de negocio y se alimenta del discurso neoliberal que ve la educación como una inversión para el ascenso social o beneficio personal.

Una vez titulados, nuestras disciplinas siguen condicionadas por la mercantilización. Lo que tiene mayor utilidad y valor social no guía el trabajo profesional de manera global; en cambio, prevalece aquello

cuyo resultado (bienes o servicios) puede venderse a un precio más alto o contribuir a la mayor acumulación de ganancias para un grupo reducido. **Y aunque el conocimiento se produce socialmente, los profesionales venden su conocimiento como mercancía y terminan enajenándose al punto de concebir su profesión únicamente para su beneficio personal**, olvidando el deber que se tiene con la sociedad.

Esto explica que, aunque más de un millón de familias no tengan acceso garantizado a la vivienda, los profesionales de la arquitectura reproducen diseños pre formateados con criterios mercantiles para empresas que buscan maximizar sus ganancias a costa de la especulación. Este fenómeno perpetúa y legitima el acaparamiento de un recurso vital, poniendo a los arquitectos al servicio de los agentes inmobiliarios, así como históricamente han sido los edificadores de las élites que pueden diseñar a su antojo. Mientras aquellos que trabajan en proyectos de vivienda social ven limitadas sus posibilidades creativas debido a programas restringidos y dificultades para acceder al suelo urbano en una ciudad cuya planificación no responde a criterios de igualdad.

De igual manera, los médicos y especialistas asumen y justifican para su conveniencia la validez del libre ejercicio profesional y concentran sus horas en el sector privado, mientras las listas de espera del sistema de salud público, que atiende a la mayoría de la población, siguen aumentando. Además, los profesionales de la salud que trabajan en atención primaria carecen de los recursos necesarios para realizar diagnósticos y tratamientos resolutivos, lo que limita su capacidad para desarrollar una salud preventiva.

También se explica cómo el desarrollo de la ciencia y la ingeniería ha quedado relegado a un segundo plano debido a la matriz productiva primaria exportadora impuesta en nuestro país. Esta situación impide la innovación necesaria para dar un salto estratégico hacia la generación de bienes con mayor valor agregado y tecnologías, desaprovechando el potencial creativo de muchos científicos e ingenieros que podrían contribuir al desarrollo de la economía nacional.

Estos ejemplos, junto con otros que podrían mencionarse en diversas áreas profesionales, son el resultado de una lógica estructural en la que el valor al que se puede llegar a transar el conocimiento y ejercicio profesional predomina sobre su utilidad, valor social, complejidad y calidad. Esta es la definición de contradicción: cuando dos fuerzas opuestas aparecen simultáneamente en una situación y no pueden coexistir, como el valor de cambio sobre el valor de uso, prevaleciendo una sobre la otra.

Hablamos de la contradicción del trabajo profesional como una idea global. Aunque existen casos excepcionales en los que un profesional puede sentir que desarrolla más elementos de su disciplina, aun con limitaciones, la mayoría no lo logrará. Esto se refleja en el hecho de que más de un millón de profesionales y técnicos no trabaja en lo que estudió, evidenciando el gran fracaso social de contar con trabajadores calificados que el mismo sistema clasifica como “subempleados”. Pero, según lo que hemos planteado en este análisis, esto abarcaría a todos los profesionales, ya que todos estamos subutilizados para las necesidades y problemas de la sociedad, los cuales son problemas de nuestras propias disciplinas.

A nivel subjetivo, esto produce tensiones y frustraciones en nuestro trabajo diario, generando sinsentidos y dolores. **El sistema económico en el que vivimos atenta contra la vocación profesional y nuestras intenciones de desarrollo disciplinar.**

Mientras las urgencias sociales se agudizan, el universo cultural de los profesionales parece alejarse de los temas importantes. El sistema hábilmente ofrece como vía de escape frente a las frustraciones y problemas laborales una frívola compensación con acceso a ciertas comodidades. Una parte importante de nuestro sector se refugia en su vida personal, asumiendo su profesión solo para su beneficio privado, dejando de lado el enorme rol que pueden jugar

Profesionales Convocación en Loma Latorre, Viña del Mar, sector afectado por los incendios de principios del año 2024.



en la sociedad y, especialmente, frente a las condiciones de injusticia que vive la mayoría popular. Incluso, muchos profesionales terminan reproduciendo y alimentando con teorías espurias las grandes máximas que las justifican. Ese profesional funcional es el tipo de trabajador al que el sistema aspira que nos convirtamos, que agacha la cabeza y se preocupa de cumplir su tarea y función, que se evade de la realidad y pierde la dimensión global de la sociedad.

Ante esta situación, no hay neutralidad posible. Aquellos que se escudan en que la técnica es imparcial, obvian que el sujeto que la ejecuta es un actor que se posiciona en la realidad, por lo que, si no se sitúa contra este sistema de injusticias, finalmente termina por respaldarlo. Por lo tanto, es necesario que los profesionales retomemos nuestra vocación, asumamos una postura activa de rebeldía y denuncia frente a esta contradicción. No basta con desarrollar una “resistencia” individual, ya que esta se desgasta rápidamente. Es imprescindible elevar esta resistencia a un nivel superior de organización y politización, para formar una fuerza de profesionales y técnicos que enfrenten esta realidad. Guiados por principios de justicia y conscientes de nuestro privilegio dentro del pueblo, debemos orientar nuestro desarrollo profesional.

Tenemos el deber moral y vital de convertir nuestra técnica en una herramienta de lucha, que alimente un pensamiento popular y contribuya al cambio social para así poder aplicar los conocimientos que hemos adquirido y los que podemos desarrollar sin trabas de ninguna clase, puesto que no hay nada más frustrante que saber algo y no poder aplicarlo, tener un conocimiento de algo y no poder ser útil. Solo mediante un cambio social podremos tener la extraordinaria oportunidad de ser constructores y creadores.

Para superar esta contradicción y transformar a los profesionales que hoy somos una pieza más del mercado en productores de conocimientos capaces de responder a los grandes problemas que enfrenta la mayoría popular y en constructores útiles de una sociedad justa, es necesario recuperar la vocación profesional a través del estudio crítico, el trabajo creativo y la acción colectiva. Esa es la visión y la invitación de la organización ConVocación.

Café Clínico en Concepción por Profesionales Convocación



RECONSTRUCCIÓN POST INCENDIOS: LA PRECARIEDAD HABITACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO

La Región de Valparaíso, históricamente afectada por incendios, enfrentó en 2024 uno de los más devastadores, dejando miles de damnificados. A pesar de la urgencia de la reconstrucción, la respuesta gubernamental, a través del denominado “Plan de Reconstrucción”, ha sido lenta e insuficiente, apoyándose exclusivamente en programas preexistentes que nunca han servido para resolver el problema de vivienda en Chile, y que evidentemente, no están a la altura de lo que requiere la situación de emergencia en la Quinta Región. El gobierno de Boric demuestra, una vez más, que su preocupación no va más allá de los grandes titulares y anuncios para televisión y redes sociales, y que su acción se encuentra completamente desacoplada de las necesidades urgentes del pueblo.



El vínculo entre los incendios y la Región de Valparaíso es un problema de larga data, que ha empeorado con el tiempo. Entre 2017 y 2022, la región se ubicó entre las cinco con más incendios en Chile, según Conaf. Existen diversos argumentos para explicar el origen de estos siniestros. Sin embargo, por mucho que haya intencionalidad humana detrás, lo fundamental es entender la razón principal que propicia sus alcances y repercusiones, y que, deliberadamente, no se incorpora como un factor elemental. Un ejemplo de ello es el último mega incendio ocurrido en febrero de 2024 en la zona, caracterizado como el incendio más devastador de los últimos 30 años en la región.

Boric sostuvo en cadena nacional que harían lo imposible por descubrir al “culpable”, en un desesperado intento por centrar el problema en la cuestión de quién habría encendido el incendio, más no en los factores de propagación, condicionados por las características de las viviendas y el espacio suburbanizado en que se encuentran las familias pobladoras, asentadas en zonas de alto riesgo.

Un informe de la PUCV (2024) señala que el mega incendio de febrero se agravó debido a las edificaciones precarias, hechas con materiales de fácil ingición, lo que permitió la rápida propagación del fuego, incluso hacia zonas con estructuras más resistentes. La falta de planificación, vías de acceso, puntos de agua para bomberos y medidas de mitigación, junto con la congestión por la alarma pública, complicaron las operaciones de emergencia.

¿Quiénes residen en estos asentamientos afectados por los incendios? Valparaíso es la región con el mayor número de campamentos en Chile (280 en total) y posee los campamentos con mayor densidad poblacional (un 22% más que la media nacional). Además, la última encuesta Casen reveló que en la Quinta viven más de siete mil familias en condiciones de allegamiento, y según datos del Minvu, la mayoría de estas familias residen en asentamientos precarios localizados en laderas de cerros, altamente vulnerables a desastres, donde siguen proliferando viviendas precarias. Estas son, precisamente, las zonas más afectadas por los incendios.



Fotografía tomada por el Área de Habitabilidad de Convocación. Loma Latorre, Viña del Mar, a dos meses del incendio.

El complejo escenario habitacional, propiciado por el mercado inmobiliario tanto a nivel nacional como regional, imposibilita que las familias pobladoras puedan acceder a suelos ubicados en zonas seguras y a viviendas de mejor calidad. La Región de Valparaíso es una zona marcada por una alta concentración de la propiedad inmobiliaria, lo que propicia un alza en el costo del suelo, las viviendas y los arriendos.

De acuerdo con un estudio de la consultora Atisba (2013), en tan solo una década, en el Gran Valparaíso se compraron 23.706 casas (61.820 en toda la región), lo que representa un 29% del mercado total de segundas viviendas en zonas turísticas del país. Ante tal escenario de acaparamiento inmobiliario, el acceso a suelo y viviendas se pone cuesta arriba para las familias populares de la Quinta Región, expulsándolas hacia las zonas de menor urbanización y mayor riesgo.

¿Plan de Reconstrucción? Ante la reconstrucción como oportunidad, prevalece la precariedad

A pesar de la devastación causada por el incendio, el escenario ofrecía al gobierno una oportunidad para corregir la precariedad habitacional y la suburbanización preexistente, impulsando una reconstrucción que redujera la exposición a futuros desastres. Se pudo haber considerado la reubicación de familias en zonas críticas, pues los suelos, ya degradados y erosionados, combinados con las pendientes pronunciadas, aumentan el riesgo de deslizamientos y derrumbes. Además, en la mayoría de los territorios afectados, no hay muros de contención, a pesar de las inclinaciones y grandes taludes presentes.

La necesidad de reconstruir las viviendas abrió un espacio que se debió aprovechar para implementar un plan de habilitación de suelo, que considerara la construcción de muros de contención y cortafuegos urbanos. Evidentemente, esto debía correr con sentido de urgencia, de manera de implementarse antes de que los vecinos iniciaran algún proceso de construcción por cuenta propia. Aquí, una vez más el gobierno no marcó diferencia alguna con sus antecesores, la lentitud y la indiferencia fueron la tónica, haciendo caso omiso de la situación de emergencia en que se encontraban miles de familias que lo habían perdido todo.

Frente a la magnitud de la emergencia, la respuesta gubernamental que se presentó públicamente con el pomposo título de “Plan de Reconstrucción”, sólo ha considerado la implementación de programas de vivienda que ya existían previo al incendio y en su modalidad tradicional, es decir, con la burocracia y dilación que los caracteriza, y que en el mejor de los casos, se enfocan exclusivamente en la unidad de vivienda, sin contemplar un proyecto integral para cada población en su conjunto. Por lo que,



Fotografía tomada por el Área de Habitabilidad de Convocación. Durante la instalación de las viviendas de emergencia se pesquisaron diversos problemas, como se evidencia en la imagen, en donde los pilares fueron instalados encima de la red sanitaria provisoria.

incluso implementándose con diligencia (que no ha sido el caso), aun así, terminarán reproduciendo la situación de precariedad urbana y habitacional en estos barrios. Si estos programas habitacionales han sido completamente insuficientes para resolver el problema de las familias sin casa en sectores consolidados, evidentemente serán insuficientes ante un escenario totalmente arrasado por el fuego.

El mega incendio también abrió un escenario ideal para que apareciera un Estado capaz de construir viviendas y no depender del interés o la rentabilidad de los proyectos por parte de empresas privadas. Pese a que, en el contexto de campaña, Boric deslizó la idea de una empresa

constructora estatal, y que la respuesta al incendio pedía a gritos una capacidad constructiva que superara la escasa y mezquina oferta del sector privado, esa propuesta se quedó en el papel y no pasó de ser una promesa de campaña más.

Lo cierto es que, al momento de hacer frente a la emergencia en la Quinta Región, el gobierno de Boric se ha comportado como un burócrata inoperante y ultra conservador, con la cobardía y moderación propias de la elite política chilena, que considera “aceptable” que las familias pobladoras se amontonen en zonas de escasa urbanización, precariedad y riesgo latente. Ad portas de cumplir un año desde el mega incendio, no se percibe ninguna intención por mejorar las condiciones de vida de las familias populares afectadas.

El negocio con la emergencia popular

En sintonía con la indolencia del gobierno ante la emergencia y la necesidad de reconstrucción post incendios, la política subsidiaria ha mantenido su lógica imponderable, aprovechando cada nicho como oportunidad de negocio para la empresa privada, en desmedro de las necesidades urgentes de las familias afectadas. Las “Viviendas de emergencia”, son una clara expresión de esto.

Con dimensiones ultra reducidas (24 m² en promedio) y sistemas de fundaciones basados en apoyos de hormigón, estas soluciones se acusan como inadecuadas e insuficientes para terrenos con pendientes pronunciadas (sobre 25%), lo que es una característica casi general de la zona afectada. Además, poseen escasa aislación térmica, con soluciones de cubierta de poca pendiente, poco funcionales para los fuertes vientos de la zona, carentes de canaletas y bajadas de aguas lluvias y, por lo general, muy mal instaladas, tanto a nivel de fundaciones, estructura y conexiones sanitarias y eléctricas.

Con la llegada del otoño e invierno y las fuertes lluvias, se han producido otros problemas, ya que las viviendas presentaron fallas en las uniones, permitiendo la entrada de frío y humedad, afectando la comodidad y la salud de los habitantes, y dañando el mobiliario. Además, acelera el deterioro de los materiales, afectando la durabilidad y seguridad de las viviendas. Vecinos del campamento Manuel Bustos y otros sectores de Achupallas, en entrevista con Radio Cooperativa en mayo de 2024, denunciaron que la gran mayoría no resistieron las primeras lluvias de la temporada.

Además, la información proporcionada por autoridades y empresas constructoras a las familias ha sido insuficiente y confusa, dificultando un control eficaz. La fiscalización de las obras, por parte de Serviu y las municipalidades, ha sido prácticamente inexistente, resultando en una lentitud en la construcción de las viviendas y en instalaciones defectuosas.

Esto pone de manifiesto la priorización del interés empresarial por sobre las necesidades urgentes de los pobladores, donde sólo ha importado el negocio de la producción e instalación de estas viviendas, sin considerar sus condiciones de uso en el contexto de emergencia. De hecho, el mismo Gobierno denunció el aumento desproporcionado en el precio de las viviendas de emergencia, por parte de las empresas proveedoras, a pocas semanas del mega incendio, evidenciando no sólo el interés real detrás de este negocio, sino también la subordinación y pasividad total del gobierno de Boric al capital privado.

Autoconstrucción ¿asistida?

En el papel, el Minvu ha puesto cinco alternativas de programas a disposición, para una solución de vivienda para las familias que perdieron su hogar en el incendio de comienzos del 2024: Autoconstrucción Asistida (ACA), Construcción en Sitio Propio, Pequeño Condominio, Vivienda Industrializada, y Adquisición de Vivienda Construida (AVC). De todos ellos, el programa predominante ha sido el de Autoconstrucción Asistida (D.S. 49 del MINVU), que plantea un proceso en el cual la familia postulante construiría su vivienda con asistencia técnica constante y sistemática de un profesional.

Sin embargo, **debido a la demora en la respuesta institucional, la mayoría de los pobladores tuvieron que autoconstruir sus viviendas con recursos propios (es decir, endeudándose) y sin ningún tipo de asistencia técnica.** Esto relegó al programa de Serviu a un rol principalmente simbólico, creando la imagen de una institucionalidad “presente” en la emergencia, pero sin una verdadera incidencia en el proceso de reconstrucción habitacional.

Entonces, ¿por qué este ha sido el programa predominante? Porque es el programa que permite a la autoridad delegar prácticamente toda la responsabilidad de la reconstrucción sobre los hombros de cada familia, pero bajo el manto de un “programa oficial”, encubriendo lo que, en realidad, es lisa y llanamente negligencia e indolencia institucional. Además, este subsidio da pie para que Serviu y la Municipalidad puedan canalizar un problema que afecta a miles, bajo una modalidad puramente individual de “solución”, sacando provecho de la necesidad urgente de cada familia para entraparla en un proceso que tiende a aislarla del resto de los vecinos afectados, desalojando cualquier iniciativa colectiva.

Fotografía tomada por el Área de Habitabilidad de Convocación. En diversas localidades se evidencia el deterioro de los suelos y la necesidad de contar con muros de contención de manera urgente.



Claramente esto juega en contra de las familias afectadas y a favor de la autoridad, la cual puede operar con relajo y lentitud, sin riesgo de tener que enfrentar la presión de las familias exigiendo respuesta en grupo y de forma organizada.

El retardo en la respuesta institucional, que obligó a las familias a tener que salir al paso levantando por sí mismas sus viviendas, hace aún más difícil el poder implementar trabajos de habilitación de los suelos donde se emplaza cada construcción, cuestión que, ante las fuertes pendientes propias de la topografía de los sectores incendiados, y la erosión de los terrenos producto del incendio, se evidencia como una urgencia ineludible. Esto quiere decir que, a pesar de que la necesidad de reconstruir abrió la oportunidad para realizar obras de mejora de los terrenos en cada sitio (muros de contención, refuerzos, escalonamientos, etc.) previo a la construcción de la vivienda misma, las autoridades responsables decidieron hacer la vista gorda.

Como si esto fuera poco, otro efecto directo de la tardía respuesta institucional es que muchas de las viviendas levantadas por cuenta propia, fueron autoconstruidas acoplándose a estructuras de hormigón armado; radieres, plataformas en base a losa, pilares y cadenas, que fueron afectadas por el fuego de los incendios, por lo que evidentemente podrían representar un grave riesgo para las familias que las habiten.

La precariedad habitacional como política de vivienda, y el silencio cómplice del mundo profesional

Evidentemente, el telón de fondo del problema de la vivienda, que afecta a las familias pobladoras, es el mercado inmobiliario, que con su lógica acaparadora, constituye un factor determinante en la precariedad habitacional y las condiciones de inseguridad en que debe desarrollar su vida la mayoría popular en la Quinta Región. **La concentración de la propiedad inmobiliaria, que propicia la especulación y el alza en los precios del suelo y las viviendas, seguirá empujando a miles de familias a asentarse en zonas de alto riesgo, en quebradas y laderas de cerros, donde las construcciones informales se encuentran en constante riesgo de incendios y otros desastres.**

Sumado a esto, las consecuencias del siniestro de febrero han revelado la fragilidad de las políticas de vivienda y gestión del territorio. Como mencionamos anteriormente, a pesar de los daños generalizados y el alto número de víctimas, el Gobierno mantuvo un enfoque tradicional y burocrático para abordar la emergencia. En lugar de implementar soluciones innovadoras o replantear la planificación urbana para proteger a los pobladores, se recurrió sólo a programas preexistentes, los cuales han probado ser ineficaces para responder a la magnitud de la crisis. Las familias damnificadas han quedado sujetas a la capacidad de producir con sus propios recursos, construyendo en condiciones aún más precarias e inseguras que antes.

Aun así, la catástrofe provocada por los incendios, generó una oportunidad para el gobierno de Boric, en el marco del urgente proceso de reconstrucción, para cambiar la lógica subsidiaria y mercantil de la actual política habitacional. Como mínimo, se pudo haber implementado mecanismos para que el Estado, en lugar de seguir subsidiando la oferta privada de viviendas, interviniera dicha oferta a través de la construcción directa, lo que habría permitido amortiguar y reducir el dramático desfase existente entre la cantidad de viviendas que se necesitan, y la escasísima cantidad de viviendas que efectivamente se han construido hasta la fecha. La prometida “Empresa Constructora Estatal”, anunciada con bombos y platillos en la campaña electoral, brilló por su ausencia.

El actual panorama, a ocho meses del incendio, constituye la evidencia de un Estado chileno completamente subsidiario de los intereses privados, donde el sentido de urgencia y el carácter de emergencia se subordinan a los tiempos electorales y prioridades financieras del negocio inmobiliario, y cuya política de vivienda se reduce a meros mecanismos de financiamiento, careciendo casi completamente de criterios de planificación urbana y habitabilidad que pongan el centro en mejorar las condiciones de vida de la mayoría popular.

Bajo la misma lógica, la mayor parte de los profesionales cuyas disciplinas tienen directa relación con el problema habitacional y que se han incorporado a este fallido y mal llamado “Plan de Reconstrucción”, se han plegado irreflexivamente a los esquemas ya conocidos, sin cuestionar las consecuencias a largo plazo de reproducir y perpetuar la mirada cortoplacista que ha marcado la respuesta a la urgencia en la Quinta Región. Valparaíso sigue siendo una región altamente precaria y vulnerable, donde la falta de planificación urbana y habitacional, y la prevalencia del negocio inmobiliario por sobre cualquier criterio de dignidad y seguridad para los pobladores, seguirán siendo caldo de cultivo para que este tipo de desastres se repitan en el futuro, sin ninguna transformación real en la vida de las familias afectadas.

Nuestra posición, como profesionales, no debe alinearse con la mezquindad mercantil de la empresa privada, asumiendo la emergencia como una mera oportunidad de negocio u oportunidad laboral. Nuestra obligación es reponer nuestra vocación profesional en pos de enfrentar y resolver los problemas, especialmente aquellos que golpean a la mayoría popular, sin trazar los principios de justicia y dignidad que deben mandar en la conciencia, y que deben establecer el marco para el diseño, implementación y funcionamiento de las políticas públicas en nuestro país.

EL PRECIO DEL CÁNCER EN CHILE

Hoy la principal causa de muerte es el cáncer. Este aumento alarmante resalta no solo la creciente prevalencia de la enfermedad, sino también las profundas desigualdades en el acceso a diagnósticos y tratamientos. Las políticas de salud actuales han mostrado limitaciones en su eficacia, dejando a muchas personas sin la atención oportuna, mientras la enfermedad se convierte en un lucrativo negocio.



En los últimos años, el cáncer se ha convertido en un problema de salud pública, aumentando su prevalencia e impactando en la morbilidad de la población nacional. En 2021, se posicionó como la principal causa de defunciones en el país, desplazando a las enfermedades cardiovasculares que durante décadas fueron la primera causa de muerte. En 2022, la incidencia fue de 59.876 casos, con 31.440 fallecimientos, ubicándose como una de las principales causas de muerte y la primera causa de AVISA (Años de Vida Ajustados por Discapacidad).

Este cambio epidemiológico ha llamado la atención de organismos nacionales e internacionales, que han implementado diversas políticas públicas para disminuir el impacto del cáncer en los sistemas de salud. En 2022 se publicó un nuevo plan nacional del cáncer con el objetivo de establecer las causas y prevenir el aumento de su incidencia. Este plan atribuye el aumento de la mortalidad por cáncer a los avances en la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares (ECV), el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida.

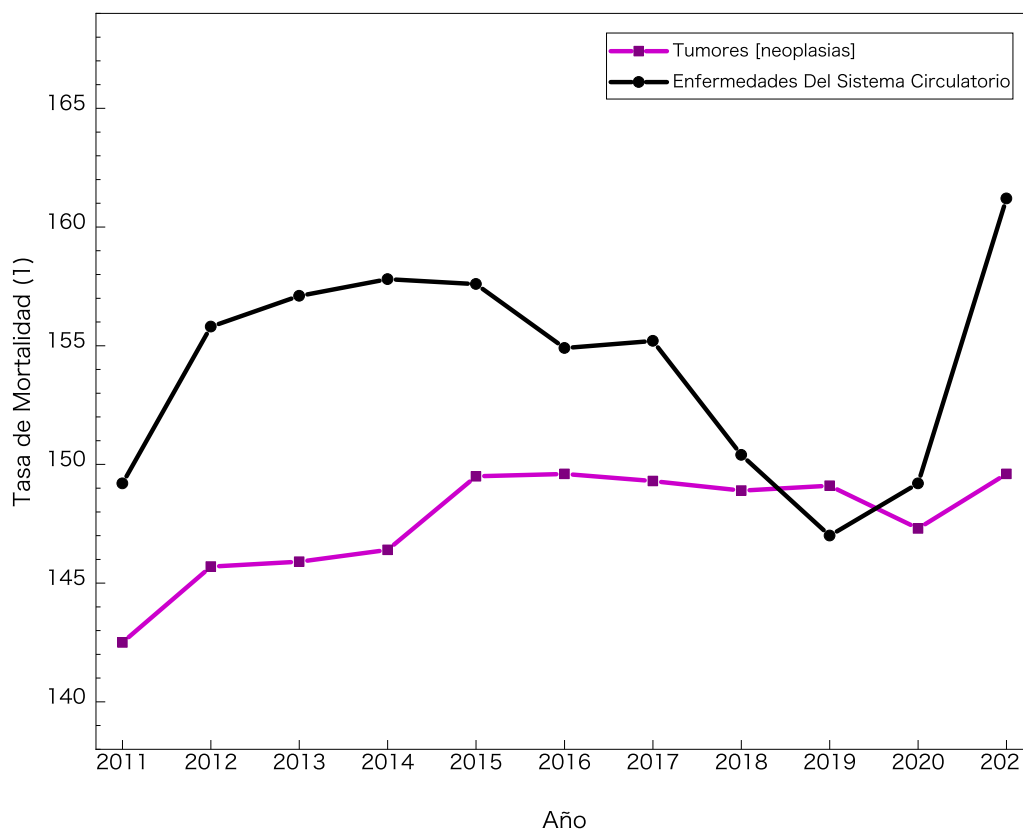
Para esclarecer el alza en la morbilidad por cáncer el plan nacional es impreciso al mencionar que se debe a un mejor control de ECV, basta con revisar algunos datos del DEIS para evidenciar que la tasa de mortalidad de enfermedades del sistema circulatorio sufrió una disminución sólo entre los años 2017 y 2019, y luego se ha mantenido en alza, llegando a superar a la mortalidad por Tumores (Gráfico 1)¹. A esto se suma, **que al revisar las causas de hospitalizaciones a nivel país en los últimos cuatro años, se evidencia un aumento tanto de enfermedades asociadas a Tumores como enfermedades de origen cardiovascular, lo que denotaría que estas últimas no estarían del todo controladas en la población (Gráfico 2)¹.**

A nivel mundial, entre el 30 y el 40% de las muertes por cáncer son atribuibles a cinco factores de riesgo: sobrepeso y obesidad, mala alimentación, inactividad física, consumo de alcohol y tabaquismo, los cuales están condicionados por factores económicos y

de escolaridad. Según la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-2017, la obesidad y el riesgo cardiovascular son significativamente mayores en personas con menos años de estudio.

Las políticas públicas implementadas hasta ahora no han logrado controlar la morbilidad, lo que sugiere que las explicaciones son más profundas y estructurales que las causas biológicas o el mejor control de otras enfermedades prevalentes.

Gráfico 1. Mortalidad por causa Tumores [Neoplasias] y Enfermedades del sist. circulatorio a nivel país



¹ Departamento de Estadística e Información en Salud. www.deis.minsal.cl.

El negocio de la salud oncológica

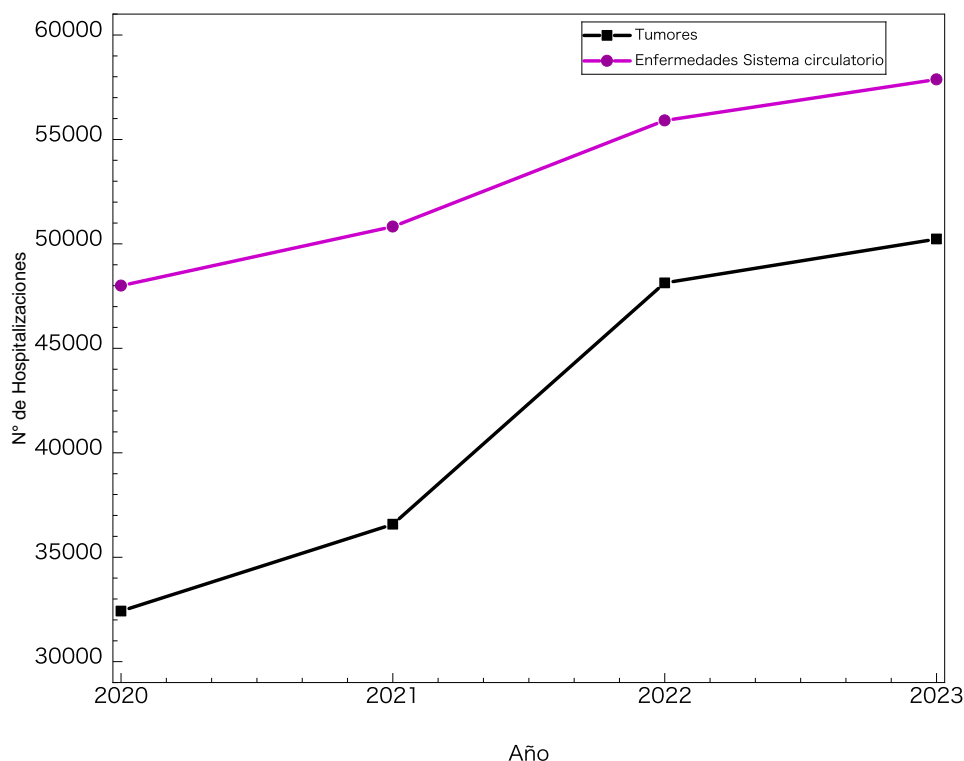
En una sociedad desigual, el diagnóstico, tratamiento y pronóstico del cáncer están determinados por factores socioeconómicos. Problemas en la Atención Primaria, listas de espera y la precarización de la salud pública contribuyen a diagnósticos y tratamientos tardíos, afectando más a la población de bajos ingresos. La pandemia empeoró esta situación, con una disminución del 55-65% en prestaciones ambulatorias oncológicas y la cancelación de miles de exámenes cruciales. En dos años, las listas de espera para cáncer aumentaron un 166%, y los retrasos en las Garantías Explícitas en Salud (GES) se incrementaron en un 55%.

Según el reporte de Glosa 06 del Minsal del primer trimestre de 2024, 15.023 personas con cáncer experimentan retrasos en la garantía de oportunidad, con 659 esperando más de un año por atención. El promedio de espera para la primera atención con un especialista es de 98.35 días, afectando principalmente a pacientes con tumores del sistema nervioso central, cáncer de colon, tiroides y vesical.

El retraso en la atención por especialistas médicos se debe a la mala distribución de estos entre la atención pública y privada, profundizando las listas de espera. Solo 93 oncólogos trabajan en la red pública, de un total de 238 en Chile, y el 53% de ellos se concentran en la Región Metropolitana. Mientras que diez regiones del país tienen tres o menos especialistas, lo que afecta en el diagnóstico y tratamiento, ya que los comités oncológicos requieren al menos un especialista.

En 2021, el cáncer colorrectal (CCR) fue la tercera causa de muerte por cáncer, después de pulmón y estómago. Un estudio de 2022 mostró un aumento del 55% en la incidencia de CCR en personas de 35 a 50 años, y reveló diferencias significativas en la supervivencia según el seguro de salud: el 67,7% de los pacientes con ISAPRES sobrevivieron cinco años después de ser diagnosticados, mientras que solo el 40% de los pacientes de FONASA A lo lograron.

Gráfico 2. N° de Hospitalizaciones según causa a nivel país

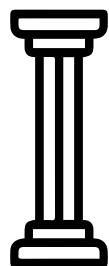


La pobreza, junto con problemas de acceso a diagnóstico y tratamiento precoz, parecen ser más determinantes en el aumento de la morbilidad por cáncer que el envejecimiento o el mejor control de enfermedades cardiovasculares.

El sistema privado de salud se beneficia de esta situación, ya que concentra los servicios de diagnóstico y tratamiento al contar con tecnología y personal necesario. Esto atrae a pacientes de Fonasa que buscan una respuesta más rápida a sus problemas de salud, considerando el costo emocional y monetario que implica esta enfermedad.

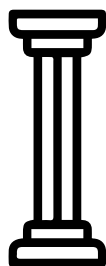
Así, tanto centros médicos como clínicas aprovechan esta precarización de lo público para aumentar sus ganancias, disfrazando de colaboración público-privada o “red integrada” el nicho de negocio que crean y que inclusive el propio Estado permite, considerando, por ejemplo, que este último pudiese adquirir para el sistema público la tecnología que se requiere para ciertos exámenes y/o procedimientos, que a largo plazo sería mucho menos costoso, teniendo presente que la demanda va en alza.

Pilares de la salud Neoliberal en esta enfermedad:



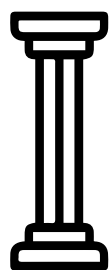
Negocio

- a. Aumento de consultas y ganancias en sistema privado dada espera en sistema público.
- b. Venta de seguros oncológicos.
- c. Negocio de industria farmacéutica.



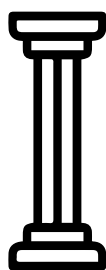
Desigualdad

- a. Concentración de especialistas y tecnología en sistema privado.
- b. Mayor sobrevida en pacientes isapres vs pacientes fonasa.
- c. Distribución desigual de factores de riesgo según nivel socioeconómico.



Precarización de lo público

- a. Desvío de fondos públicos al sistema privado.



Foco Curativo en desmedro de la prevención

- a. Escasas medidas de promoción de salud y prevención.
- b. Baja disponibilidad y cobertura de screening de patologías asociadas.
- c. Políticas centradas en el tratamiento de la enfermedad (como el GES, que inclusive no logra resolver problemas de acceso y tratamiento oportuno).

El Estado subsidia el negocio del sistema privado permitiendo su existencia y derivando a pacientes GES a clínicas privadas, desviando fondos estatales y precarizando aún más el sector público. En 2023, Fonasa pagó \$490 billones a prestadores privados por compras directas y bonos de atención, aumentando también el gasto de bolsillo familiar, esto ha llevado a Chile a ser el tercer país con mayor gasto de bolsillo en la OCDE.

El sector privado abre nuevos nichos como la industria farmacéutica y los seguros oncológicos. Los altos costos de tratamiento pueden limitar el acceso a medicamentos y tecnologías, con precios de venta que se inflan y pueden superar hasta 80 veces el costo de producción. Según la OMS, por cada dólar invertido en investigación oncológica, las farmacéuticas ganan 14,5 dólares.

Los seguros oncológicos también generan ganancias especulando con el temor de la población y la lenta respuesta del sistema público, aumentando el gasto de bolsillo de los hogares.

Al analizar críticamente este problema de salud, se expresan los pilares de la salud neoliberal que terminan profundizando el deterioro de la salud pública y aumentando la mortalidad por cáncer en la población.

El fracaso de la respuesta institucional al cáncer

A nivel institucional, el Estado ha implementado diversas políticas respecto a la gestión del cáncer, como el Comité Nacional del Cáncer (1986), los programas PANDA (1988) y PINDA (1989), el AUGES/GES (2004), el Plan Nacional (2018), y más recientemente la publicación de la Ley Nacional del Cáncer en 2020 y la publicación de la actualización del plan el año 2022.

El GES busca asegurar acceso, oportunidad, protección financiera y calidad en la atención de salud para 17 enfermedades oncológicas definidas. Sin embargo, han generado listas de espera que retrasan diagnósticos y tratamientos. Un estudio de 2019 evaluó el impacto de las GES en la mortalidad entre 2002 y 2016, encontrando una leve baja en las tasas de mortalidad de los cánceres cervicouterino, mama y vesícula, observando reducciones totales del periodo de 43%, 7% y 12%, respectivamente. Para el cáncer colorrectal, las tasas de supervivencia no mejoraron significativamente desde su inclusión en 2018, cuestionando la eficacia de la política debido a los múltiples determinantes de salud y dificultades en el acceso a la atención.

El Plan Nacional de Cáncer no ha cumplido sus objetivos.

Las listas de espera y las muertes sin tratamiento oportuno aumentan, mientras el MINSAL evalúa con autocomplacencia avances en promoción con poco impacto, como la genotipificación del VPH en el PAP, con una cobertura del 48% en lugar del 80% necesario, y la mamografía con una cobertura del 34.6% en 2020, lejos del 70% objetivo.

Nuestra mirada para transformar la atención oncológica

Frente a este problema de salud pública, urgen medidas que apunten a los pilares de salud neoliberal, ya que es la única forma de poder avanzar en la eliminación del negocio de la enfermedad y la precarización del sector público, junto con poder tener una mirada preventiva de la salud y que no esté marcada por desigualdades económicas.

En este sentido proponemos 3 líneas de acción:

1. Fortalecer el sistema público

- ★ Ampliar la capacidad de diagnóstico oportuno en todos los niveles del sistema de salud público garantizando el acceso a exámenes de screening como colonoscopia, endoscopia y tomografía de tórax en población de riesgo. Esto impactaría en diagnósticos a etapas iniciales con mejores posibilidades de tratamiento y sobrevida.
- ★ Mejorar la eficiencia de los recursos y profesionales que están subutilizados, optimizando el rendimiento de horas médicas, uso de tecnología para la toma de imágenes, tratamientos y pabellones.
- ★ Desarrollo de una industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias estatal que cree conocimientos e innovaciones de avanzada para abordar las patologías oncológicas en el país.
- ★ Integración de la información clínica de cada usuario en una ficha única protegida, que permita realizar seguimiento y gestión de casos y familias.

★ Recursos humanos: Aumentar la cantidad de oncólogos en la red pública distribuyendo la dotación actual en los servicios de salud donde se requieren, planificar la formación de nuevos profesionales y equipos oncológicos.

2. Eliminar el negocio con la enfermedad

★ Existencia de un único sistema de salud público donde la tecnología, infraestructura y profesionales estén disponibles para la atención de la población sin discriminación por capacidad adquisitiva.

★ Eliminar la existencia de seguros oncológicos y la tercerización de servicios oncológicos, ya que buscan generar ganancias a costa de la enfermedad y que promueven que el sistema público tenga condiciones precarias para enfrentar este problema.

3. Prevención

- ★ Plan de descontaminación de zonas de sacrificio en las que se ha detectado aumento de incidencia de cáncer, como, por ejemplo, la región de Antofagasta.
- ★ Fortalecer planes de promoción de actividad física e intervención en ambientes alimentarios, ya que la obesidad y el consumo de alimentos ultraprocesados es un factor de riesgo para desarrollar cáncer.



EL PROBLEMA DE LA ENERGÍA EN CHILE: UN POTENCIAL DESAPROVECHADO

Pese a que el país cuenta con un gran potencial para generar energía renovable, sigue siendo dependiente de combustibles fósiles importados, lo que aumenta las tarifas eléctricas y beneficia a grandes corporaciones extranjeras. A menos que se reoriente el desarrollo hacia una verdadera independencia energética, aprovechando los recursos naturales y fomentando la producción nacional, la crisis energética continuará afectando a la población y al país.



El 2024 se ha caracterizado por las alzas de tarifas eléctricas para los hogares y los cortes de luz, debido a los temporales y la mala mantención del tendido. Estos aumentos en el precio y apagones hacen pensar que la energía eléctrica es un bien escaso y de difícil acceso para nuestro país, sin embargo, esta idea proviene de la forma en la que se ha desarrollado el sector en Chile, desaprovechando los recursos que nos permitirían una soberanía energética para tomar decisiones sobre la producción, distribución y consumo, para garantizar el bienestar y el desarrollo sostenible de la sociedad.

Por el contrario, **nuestro país presenta una dependencia de combustibles que generan alta emisión de gases de efecto invernadero**, un desperdicio considerable de la energía producida por fuentes renovables y una transnacionalización absoluta de un sector tan estratégico como el eléctrico.

En este contexto se alzan nuevas industrias para desarrollar tecnologías de almacenamiento energético a partir del litio y para producir hidrógeno verde como un nuevo combustible, pero que si se mantienen bajo las lógicas imperantes no traerán beneficios a la mayoría de la población sino solo a los dueños de las corporaciones extranjeras que los exploten.

En el siguiente artículo abordamos las principales determinantes del problema de la energía en Chile que conducen a desaprovechar el potencial del país.

La dependencia energética en Chile

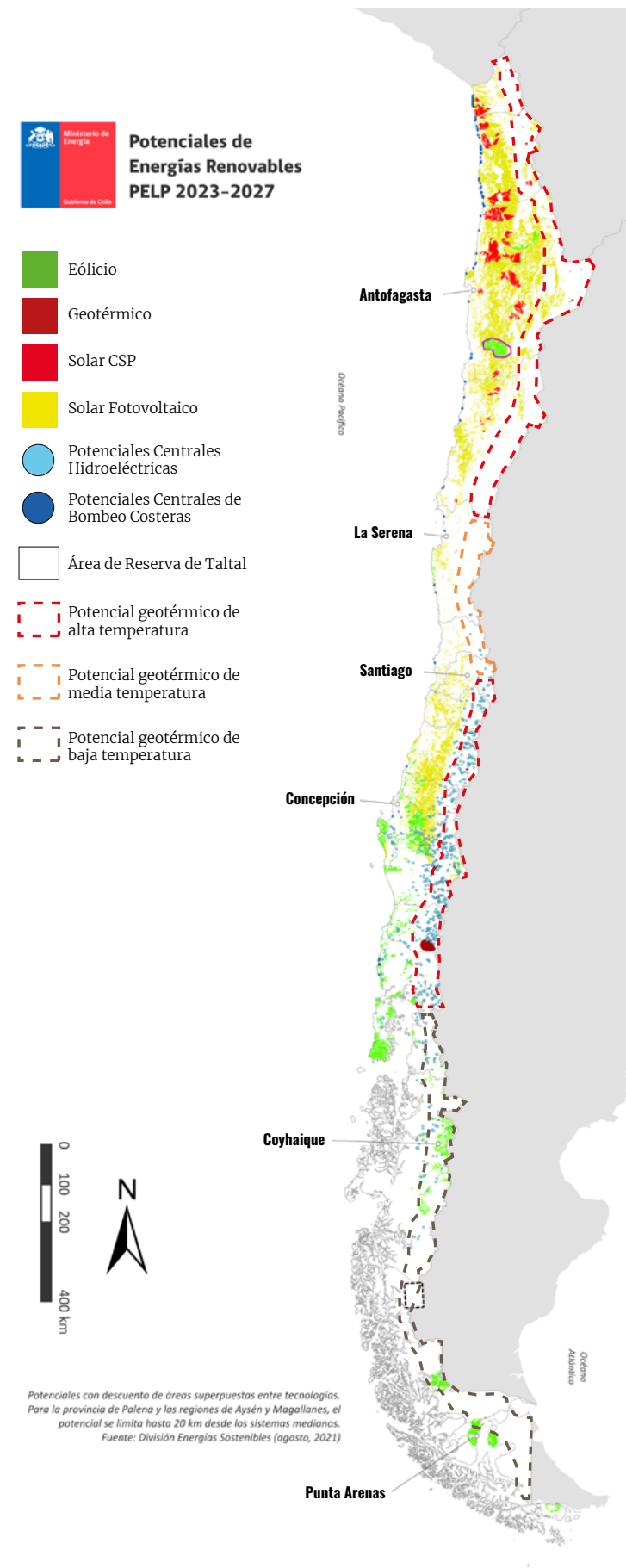
La matriz energética está compuesta por diversas fuentes de energía renovables (ER) como biomasa, hidráulica, eólica, solar y geotérmica y no renovables como gas natural, petróleo, carbón y energía nuclear. Las fuentes que se utilizan para generar la electricidad, que luego servirá para usos industriales, residenciales o en movilidad, constituyen la matriz eléctrica.

Las reservas energéticas naturales con las que Chile cuenta corresponden a amplias extensiones para la instalación de parques eólicos, terrenos de alta concentración solar para celdas fotovoltaicas, concentradores termosolares y un número significativo de reservorios geotérmicos.

La cantidad total de energía eléctrica que se podría producir en potencia en un determinado país se conoce como **capacidad instalada**, independiente si estas se pueden o no generar simultáneamente. Según datos de las generadoras eléctricas, la capacidad eléctrica instalada en 2023 estaba basada en un 35% en combustibles fósiles y el 64,9% en fuentes de ER. Estas últimas podrían ser incluso un mayor porcentaje, **ya que se estima que la producción de electricidad a partir de energía eólica en Chile podría sobrepasar en 7 veces toda la matriz eléctrica actual**, mientras que algunas proyecciones indican que las ER podrían multiplicar 70 veces la producción eléctrica actual, llegando a producir 2 TW (Ministerio de Energía, 2021).

El **consumo energético total final**, que corresponde al consumo efectivo por tipo de fuente de energía, nos habla de un escenario bastante diferente, en donde más del 65% corresponde a petróleo y gas natural, que prácticamente no se encuentran disponibles en nuestro país. Por lo tanto, a pesar de tener un gran potencial de producir energías renovables, actualmente existe una gran dependencia de combustibles fósiles importados. De hecho, el índice de dependencia energética de nuestra matriz históricamente ha superado el 70%.

Lo anterior desliza la primera y más evidente contradicción de nuestro sistema energético: teniendo la capacidad de generar una gran cantidad de energía debido a las fuentes naturales disponibles, somos fuertemente dependientes de combustibles que son importados, quedando subordinados a los intereses y las condiciones que pueden imponer los proveedores de dichos combustibles.



Esto resulta problemático en términos del acceso a la electricidad tanto para la población, que hoy debe pagar tarifas eléctricas cada vez más altas, como para el desarrollo industrial y económico, debido a que la piedra angular del crecimiento de la industria depende de la disponibilidad de electricidad y combustibles y de los precios que estos tengan.

La situación se agrava especialmente por las pérdidas de energía en la red, conocido como vertimiento de energías que se debe a la falta de capacidad para almacenarla en baterías o por la insuficiencia de las vías de transmisión actuales. Varios informes han señalado la preocupación por el desperdicio de energías, que en el caso de la solar alcanza un 11% y para la eólica un 9,8%, porcentajes que han ido en aumento.

La privatización del servicio

El sector eléctrico en nuestro país está privatizado, concentrado y pertenece principalmente a grandes corporaciones transnacionales como Enel, CGE, Chilquinta, SAESA, Inkia Energy, Engie y EDF. La única gran empresa chilena es Colbún, que representa un quinto del mercado.

El negocio de la electricidad en Chile opera bajo un sistema que garantiza márgenes de ganancias estables, con porcentajes de entre 6% y 8% en los sectores de generación y distribución, y entre 7% y 10% en transmisión. Estos márgenes no dependen directamente de la eficiencia operativa o del riesgo de mercado, ya que, si las empresas no logran alcanzar esos niveles de rentabilidad, el Estado interviene para cubrir la diferencia. Este esquema asegura las ganancias de las compañías eléctricas mediante un marco regulatorio que protege sus utilidades. En esencia, las empresas no enfrentan un riesgo financiero significativo, ya que el Estado, y en última instancia los consumidores, absorben cualquier déficit en sus ganancias proyectadas.

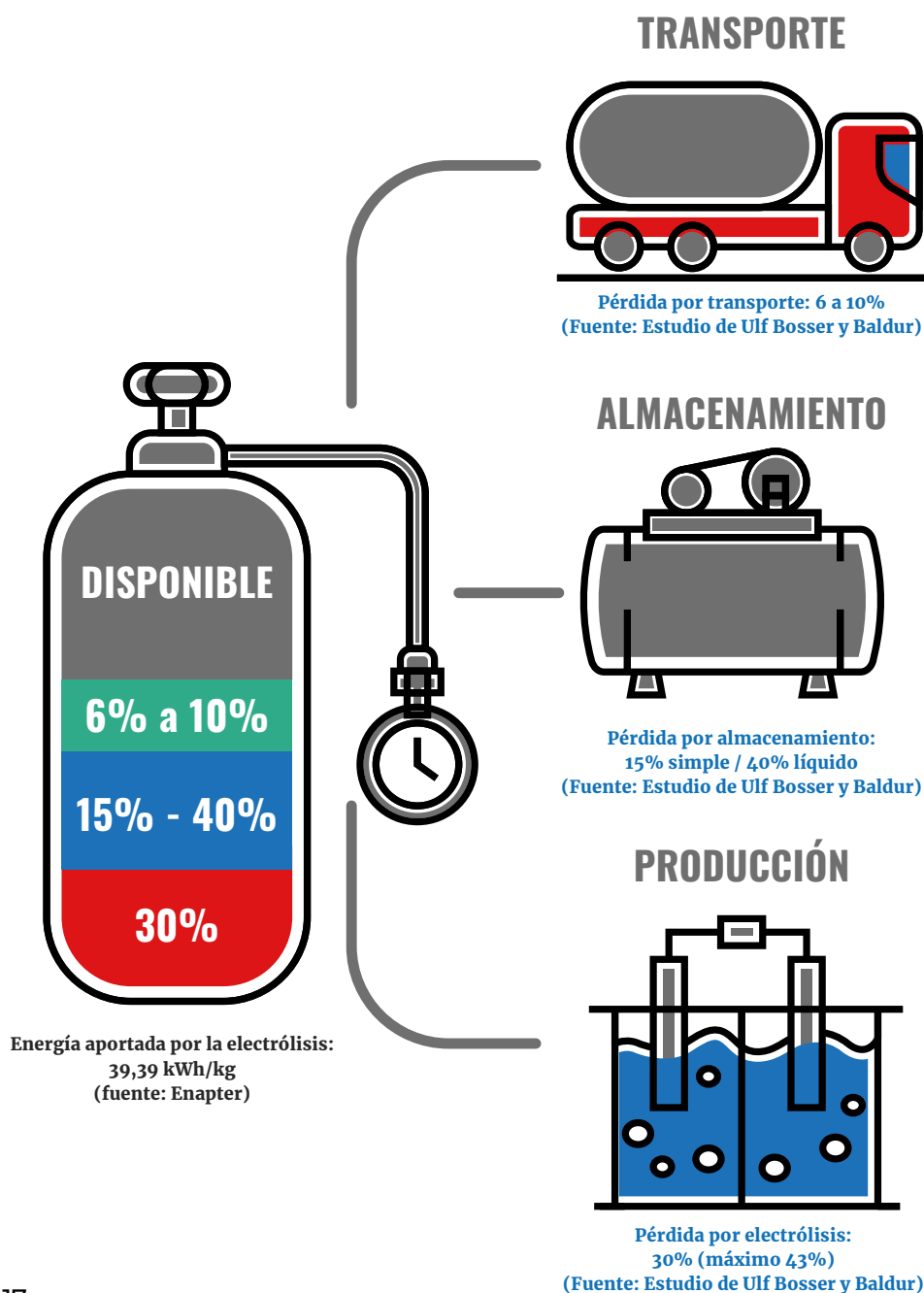
Las empresas disfrazan la libertad de acción, el control del mercado eléctrico que tienen y la alta influencia sobre los precios bajo la idea de una tarifa “técnicamente calculada”, considerando que la demanda de electricidad es inelástica para las personas, ya que es un servicio imprescindible.

Queda de manifiesto que la privatización de un servicio estratégico, que tiene características de monopolio natural, encarece el acceso para la mayoría de la población.

Nuevas tecnologías energéticas, al servicio de los privados y países de altos ingresos

Los gobiernos de Piñera y Boric han impulsado una política para que el país comience a producir Hidrógeno Verde (H2V) como un nuevo combustible limpio, aprovechando las fuentes de ER disponibles. Pero luego de un análisis sencillo podemos ver que esta no es una verdadera solución al problema, ya que en su plan de acción se asume que no

Diagrama de pérdida de energía del hidrógeno en su producción



existe un mercado interno ni la reconversión de tecnologías para aprovecharlo en el país, por lo que sus fines serían la exportación a economías extranjeras que sí tienen la capacidad de utilizar este combustible en distintos sectores industriales eléctricos y de movilidad.

En esa línea, estudios indican que la producción de hidrógeno verde (H2V) en la región de Magallanes podría cubrir hasta un 13% del mercado mundial. Además, considerando todas las fuentes de energía renovable, Chile podría generar 200 millones de toneladas anuales, triplicando la producción global actual. Sin embargo, pese a las proyecciones celebradas por el gobierno, este H2V no beneficiaría nuestra matriz energética ni productiva, más allá de los ingresos por exportación.

Hasta ahora se han comenzado 41 proyectos y un fondo para el desarrollo del H2V y sus derivados en Chile de U\$1.000 millones aportados por instituciones financieras internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco del Desarrollo de Alemania KfW, el Banco Europeo de Inversiones y la Unión Europea.

La mayoría de los proyectos de investigación y desarrollo de plantas de H2V se han financiado mediante una supuesta “colaboración” entre Estado y sector privado, es decir, la vieja fórmula de la alianza público-privada, en la que el primero crea las condiciones necesarias para que los segundos puedan llevar a cabo sus negocios.

Sin una política concreta de reconversión energética, en la que se oriente el desarrollo tecnológico y científico para adaptar la industria, el transporte y la calefacción hacia la utilización de H2V como combustible principal, este no representa ninguna utilidad para el desarrollo nacional. Mientras tanto, nuestra matriz energética no es capaz de abastecerse completamente y las tarifas eléctricas siguen aumentando, cargando el costo a los usuarios.

Es decir, **la propuesta de los últimos gobiernos no han sido más que anuncios grandilocuentes y cortinas de humo, escudándose en el problema energético y ambiental para abrir nuevos nichos de mercado que profundicen la dependencia económica y energética de nuestro país.**

Corresponde a una serie de anuncios rimbombantes y con mucha expectación para convertirse en políticas perfectamente neoliberales, en la medida que mantienen la lógica extractivista y perpetúan nuestras condiciones económicas.

Enfrentando el problema energético de forma seria

El problema energético de nuestro país debe ser enfrentado poniendo en perspectiva el desarrollo económico, científico y energético. Algunos elementos que deben ser parte de la discusión son:

★ Considerar las alternativas desde una discusión y debate científicos. La evaluación de las alternativas debe considerar no sólo qué tan “verdes” son, sino cuál es la eficiencia y cuáles son los costos ambientales, sociales y económicos, considerando energía nuclear, hidráulica, eólica, geotérmica y solar, para abastecer nuestra matriz eléctrica y energética en su conjunto, dependiendo al mínimo de fuentes externas

★ El desarrollo científico, tecnológico y de infraestructura deben abordar la necesidad urgente de energía, avanzando en aspectos ventajosos de nuestra riqueza energética. Progresar en el almacenamiento energético aprovechando las riquezas de cobre, litio y otros minerales en lugar de exportarlos como meros commodities hacia otros países y economías que le agregan valor, para comenzar a agregarlo por cuenta propia.

★ Eliminar el negocio energético, asumir que el Estado debe tener un rol central en la generación, transmisión y distribución, para entregar un servicio de máxima calidad y estabilidad a un precio justo.

Con estos principios, es posible diseñar un modelo energético verdaderamente sostenible, que sirva como base para el desarrollo productivo y tecnológico, avanzando hacia un crecimiento estratégico que priorice nuestras capacidades y necesidades como país.

En el desarrollo de la industria energética, el rol de ingenieros y científicos es esencial, quienes debemos denunciar la situación actual y disponer nuestras capacidades para el diseño de grandes proyectos que satisfagan las necesidades energéticas a largo plazo, como para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que impulsen el crecimiento industrial.

Desaladora Escondida, Bahía Coloso, al sur de Antofagasta.



MORTALIDAD INFANTIL EN EL BIOBÍO:

UN LLAMADO A LA ACCIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

La mortalidad infantil en la región del Biobío supera el promedio nacional, especialmente en Concepción. Aunque Chile ha reducido significativamente su tasa de mortalidad infantil, persisten desigualdades regionales. Las causas principales incluyen problemas durante la gestación y la atención perinatal, así como factores sociales y económicos.

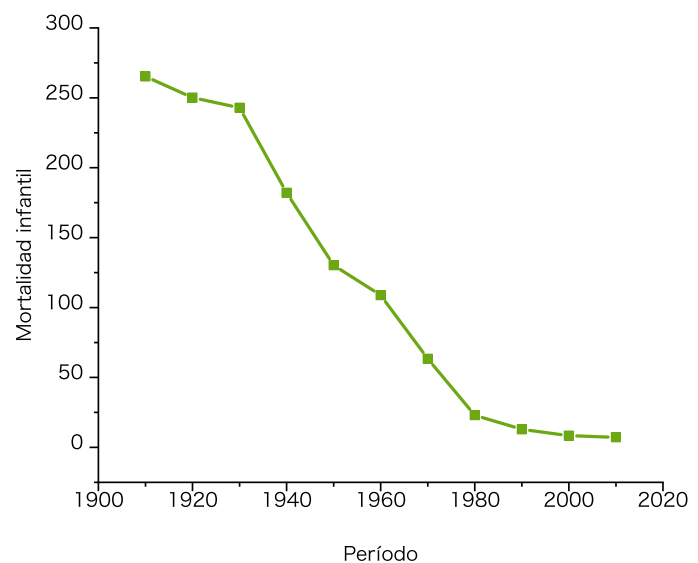


La Mortalidad Infantil se refiere a los fallecimientos que ocurren en lactantes desde el parto hasta antes de cumplir un año de vida. Es un buen reflejo de las condiciones de vida de una población, la situación de la infancia y el acceso y nivel de salud en un país, especialmente en lo que respecta a la salud materno-infantil. Esto se debe a que el crecimiento y desarrollo durante la gestación y la infancia son muy sensibles a factores ambientales, económicos, históricos, culturales, sociales y político-ideológicos, los cuales impactan en los procesos de salud-enfermedad y, en algunos casos, en la mortalidad en esta etapa de la vida.

Para describir este aspecto en un país o región, se utiliza la TMI, que permite estimar la probabilidad de que un niño muera antes de cumplir un año y comparar la MI entre diferentes localidades con distintos números de nacimientos al año. Esta tasa se calcula como el cociente entre las defunciones de menores de un año y el total de nacidos vivos, ajustado para un área geográfica y un periodo determinados. Cabe mencionar que la defunción se registra según la comuna de residencia materna para evitar que se sobreestime la MI en comunas con centros de salud de referencia.

Nuestro país es reconocido a nivel mundial y en especial en Latinoamérica (LA) por la reducción de la TMI, pasando de ubicarse como el país con más altos índices de muertes infantil en los años 1940 (por cada mil nacidos vivos fallecían 250 niños) a ubicarse dentro de los 3 países con menor mortalidad infantil de LA compartiendo podio con Cuba y Costa Rica, actualmente con una TMI de 5,79. Este descenso es explicado por el manejo de enfermedades infectocontagiosas (diarrea, neumonías) y por medidas de salud pública que fueron tomadas en diferentes periodos de la historias de nuestro país como la instalación de programas de vacunación, entrega de alimentación complementaria tanto a infantes como gestantes, acceso a agua potable y alcantarillado, uso de refrigerador y cocinas, aumento de la escolaridad de madres y padres, progreso en manejo de pacientes obstétricas y neonatales.

Gráfico 1: Mortalidad infantil por sexo, Chile, 1909-2017



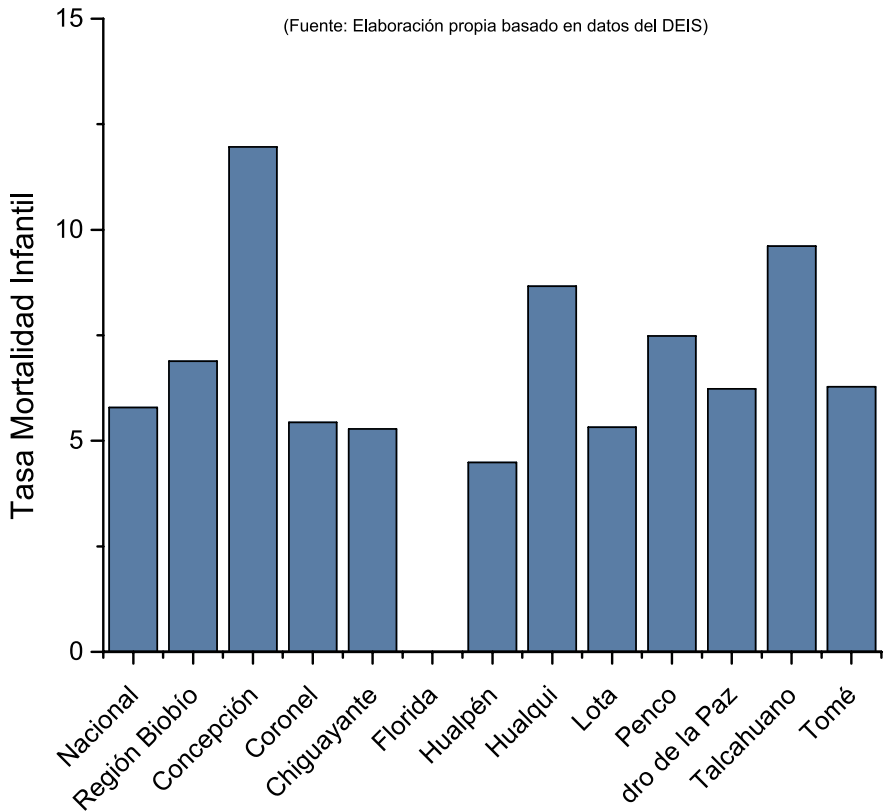
Fuente: Estudio "Mortalidad general e infantil en Chile en el largo plazo", 1909-2017. Manuel Llorca-jaña

Sin embargo, aunque a nivel país la TMI ha disminuido significativamente, alcanzando la tasa actual de 5.79, al desglosar esta información por regiones y comunas se observan diferencias importantes en todo el territorio nacional, lo que indica que la reducción no ha sido homogénea en las diversas localidades.

En particular, la TMI en la región del Biobío en 2021 está 1 punto por encima de la tasa nacional, con 4 comunas del Gran Concepción superando el promedio nacional. Destaca especialmente la comuna de Concepción, que casi duplicó las cifras a nivel país, siendo la más alta.

Gráfico 2: Tasa Mortalidad Infantil, año 2021

(Fuente: Elaboración propia basado en datos del DEIS)



representa la frecuencia de defunciones en lactantes entre 28 días y 11 meses.

Según estudios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “cuando la TMI es alta, predominan las muertes denominadas “infantiles tardías” que tienen como principales causas la desnutrición y las infecciones. Cuando la TMI es baja, se torna más importante la llamada mortalidad neonatal cuyas causas principales son las enfermedades perinatales y las anomalías congénitas”¹. El primer escenario se presenta generalmente en países de bajos ingresos, donde las condiciones materiales y sociales son más adversas para los lactantes, como la falta de acceso a servicios básicos o alimentación. En contraste, el segundo escenario ocurre en países de mayores ingresos, donde estos elementos vitales están más garantizados, y las patologías congénitas y perinatales son la principal causa de mortalidad infantil.

Según los datos del Departamento de Estadísticas e Informaciones en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud (MINSAL) sobre el números de defunciones según edad, se observa que la mayor parte de las defunciones corresponde a Mortalidad Neonatal, particularmente en aquellos recién nacidos menores a 7 días de vida,

Esta alza que se observa precisamente en la comuna de Concepción es una tendencia en los últimos 10 años (Gráfico 3), y debe ser materia de debate por parte de las autoridades y profesionales de la salud, ya que pese al establecimiento de objetivos sanitarios y a la implementación de políticas que buscan reducir la muerte en menores de 5 años al 2030 el escenario de Concepción no mejora, por lo que es necesario un análisis más profundo de las posibles causas de esta realidad.

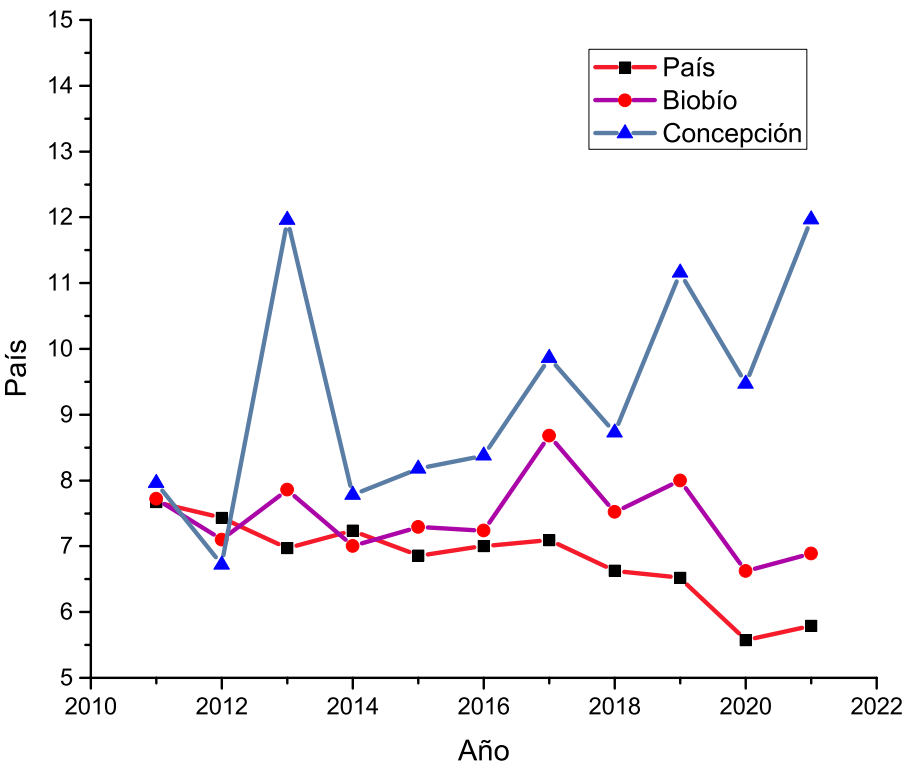
Factores críticos en la mortalidad infantil en Concepción

Como organización de profesionales de la región, creemos que esta diferencia no puede explicarse por azar. Para entender las causas de este problema, es necesario conocer los componentes de la TMI descritos en la literatura y su comportamiento, con el fin de encontrar posibles explicaciones.

En primer lugar, es importante considerar que la TMI se subdivide en tres grupos: la TMI neonatal, que mide la frecuencia de defunciones en recién nacidos (RN) vivos menores de 28 días; la TMI neonatal precoz, que refleja la cantidad de defunciones en RN vivos menores de 7 días; y la TMI postneonatal o tardía, que

Gráfico 3: Evolución Tasa de Mortalidad Infantil a nivel país, Biobío y Concepción en la última década

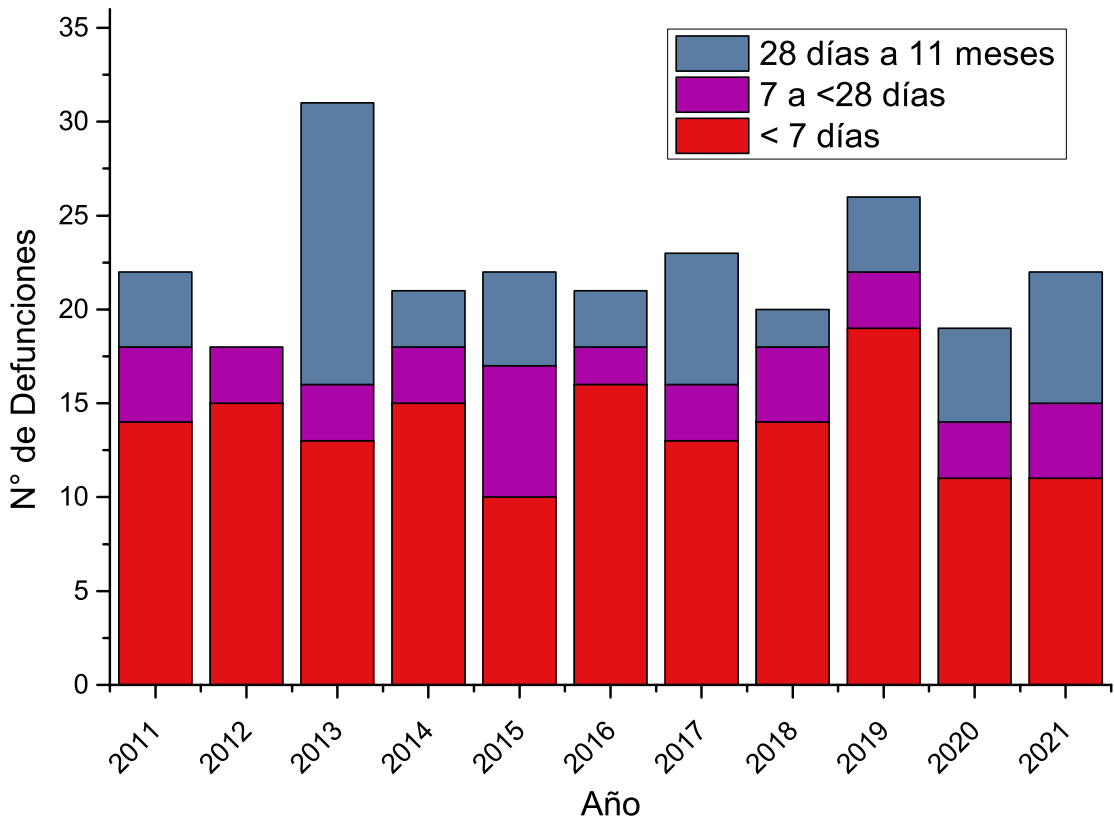
(Fuente: Elaboración propia basado en datos del DEIS)



¹ <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/6257/2000-ARG-mortalidad-infantil-provincia.pdf>

Gráfico 4: N° de defunciones según edad y año de ocurrencia en Concepción en la última década

(Fuente: Elaboración propia basado en datos del DEIS)



A partir de los indicadores de salud expuestos podemos inferir que **las causas que explican el exceso de mortalidad infantil en la región del Biobío se encuentran en el proceso de gestación y la atención perinatal de los centros asistenciales de Concepción.**

Respecto a ello existe evidencia que asocia directa o indirectamente un mayor riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer y muerte neonatal con factores maternos tales como; edad extrema, obesidad en el embarazo, hipertensión y diabetes; así como también con factores sociales como baja escolaridad, el estado civil, exposición a contaminación y otras variables socioeconómicas.

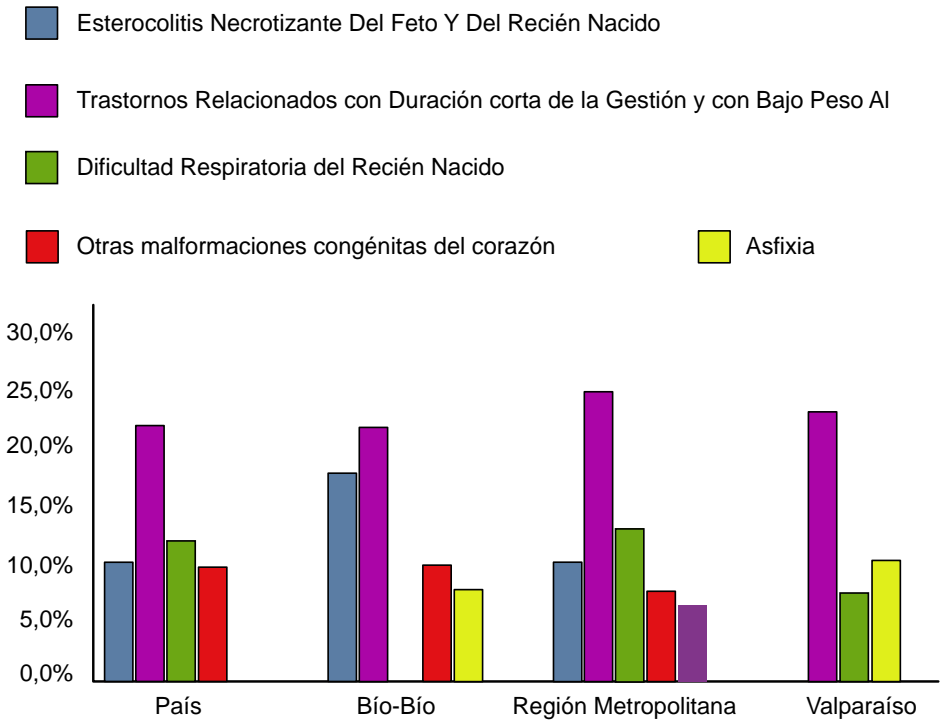
repitiéndose en general la misma tendencia desde 2011 (Gráfico 4).

En cuanto a los principales diagnósticos registrados en las defunciones de recién nacidos, destacan los trastornos relacionados con la prematuridad y el bajo peso al nacer, la enterocolitis necrotizante, las malformaciones congénitas cardíacas y la asfixia neonatal. Estas condiciones se repiten como las principales causas de mortalidad infantil a nivel nacional y en las regiones Metropolitana y Valparaíso (Gráfico 5).

Los servicios de salud y hospitales acumulan estadística descriptiva de la situación de salud de la población; sin embargo, no se genera una mayor reflexión sobre estos datos ni se trata de interpretar o generar hipótesis para explicar las causas del problema.

Gráfico 5: Diagnósticos de Mortalidad Infantil a nivel país, región Biobío, Valparaíso y Metropolitana año 2021.

(Fuente: Elaboración propia basado en datos del DEIS)



La muerte neonatal también se asocia a factores relacionados con la atención del embarazo y parto, tales como control prenatal insuficiente, parto por cesárea, la falta de recursos e inversiones para el trabajo del equipo de obstetras, y neonatología en la atención y manejo del parto prematuro y con RN de bajo peso.

Por lo que la mortalidad neonatal es un reflejo de las condiciones del embarazo, la calidad de atención en salud perinatal y neonatal. Y para lograr reducir en mayor medida la mortalidad y morbilidad es preciso, fundamentalmente, prevenir el nacimiento de niños con bajo peso, realizar un diagnóstico prenatal y tratar precozmente las enfermedades que se deben a factores que actúan durante la gestación y el parto.

Estos elementos son concordantes con el marco de análisis que tenemos como organización sobre los factores determinantes de los problemas de salud que tiene el pueblo en la sociedad actual, en donde las condiciones materiales y sociales de vida, la precarización del sistema de salud pública promovida por el negocio de la salud y la falta de enfoque preventivo sellan el pronóstico de la salud de la clase popular.

Es importante que como profesionales estudiemos las estadísticas vitales y epidemiología de nuestra población, para identificar los principales problemas de salud pública que como equipo debemos enfrentar y que nos exigen la generación de nuevos conocimientos y nuevas formas de abordar nuestro trabajo bajo una lógica creadora.

Estos problemas nos interpelan a comprometernos con generar organización y lucha para resolver la precariedad que hoy presenta el sistema de salud pública y a la falta de un enfoque preventivo que aborde los determinantes sociales, lo que muchas veces condena al pueblo a la falta de acceso a atención de salud oportuna y resolutiva, incluso al extremo de lamentar muertes evitables en recién nacidos.





**¡SÚMATE A ORGANIZAR A LOS
PROFESIONALES DE CHILE!**



**PROFESIONALES
CONVOCACIÓN**



PROFESIONALES CONVOCACIÓN ★



convocacion.cl



@convocacion



equipo.convocacion@gmail.com



Relatos Convocacion